



INFORME DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

(A los efectos del artículo 103, apartado 4, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra)

Se han recibido en esta Intervención Delegada la siguiente propuesta de Resolución del Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo:

- Resolución por la que se aprueba el abono a la entidad “UTE Pauma S.L. – Centro Puente” de la cantidad correspondiente al mes de septiembre los gastos por enriquecimiento injusto del mes de octubre de 2021, por la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral (EISOL) en el Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, por un importe total de 13.915,00 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 900003 91600 2600 231603 “Contratos de servicios de incorporación sociolaboral”, del Presupuesto de gastos de 2021. Expediente contable número 0350008003.

El órgano gestor informa:

- El contrato se ha ido prorrogando mediante distintas Resoluciones de la Directora General de Inclusión y Protección Social, hasta llegar a la última prórroga, aprobada mediante Resolución 2163/2018, de 16 de noviembre, por la que se aprueba la prórroga durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019.
- Desde el día 1 de junio de 2019, el servicio de incorporación socio-laboral se viene prestando en situación de enriquecimiento injusto debido a la imposibilidad material en la gestión por parte del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social. Legalmente está calificado y definido en la Cartera de Servicios

Sociales como una prestación garantizada y de atención ambulatoria, por lo que resulta obligatorio continuar con su prestación.

La partida propuesta para los abonos dispone de crédito adecuado y suficiente.

Se ha comprobado asimismo que se aplican los módulos de los contratos originales y no se ha producido un incremento no justificado.

Habiéndose omitido el expediente de contratación y prescindido de los trámites previstos para él en la Ley Foral de Contratos, incluida la fiscalización previa preceptiva del expediente, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 103, apartados primero, segundo y cuarto, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y se remite al efecto el presente informe al órgano gestor.

Artículo 103. Omisión de fiscalización.

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente el expediente correspondiente hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en este artículo.

2. En dichos supuestos será preceptiva la emisión de un informe por quien en el ejercicio de la función interventora tenga conocimiento de dicha omisión. Dicho informe se remitirá al órgano gestor que hubiera iniciado las actuaciones y no tendrá naturaleza de fiscalización.

3. (...)

4. Si la Intervención manifiesta su opinión poniendo de relieve infracciones al ordenamiento jurídico o discrepancias con la actuación de los órganos de

gestión, el expediente será trasladado al Gobierno de Navarra para su resolución. En caso de que la resolución sea favorable, ello no eximirá de la exigencia de responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

Por todo lo expuesto anteriormente, esta Intervención Delegada considera trasladar los citados expedientes al Gobierno de Navarra para su resolución.

Sin otro particular,

EL INTERVENTOR DELEGADO EN DERECHOS SOCIALES

Pamplona 07 de octubre de 2021

INFORME DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA E INCLUSIÓN SOCIAL

Propuesta de pago de la factura del mes de octubre de 2021 referida al Equipo de Incorporación Sociolaboral en el área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla.

Primero.- La Dirección General de Política Social y Consumo, mediante contrato suscrito con fecha 01 de junio de 2015, adjudicó la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral (EISOL) en el Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, a la UTE compuesta por Pauma S.L. y por Centro Puente.

El precio del contrato durante el periodo del 1 de junio hasta el 31 de diciembre del 2015 es de 97.405,00 euros (IVA incluido), siendo por tanto el importe mensual de 13.915,00 euros (IVA incluido).

La cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares especifica que el contrato podrá prorrogarse por acuerdo expreso de ambas partes, por anualidades vencidas, previa solicitud del contratista, siendo su duración máxima, incluidas las posibles prórrogas, de cuatro años.

El contrato se ha ido prorrogando mediante distintas Resoluciones de la Directora General de Inclusión y Protección Social, hasta llegar a la última prórroga, aprobada mediante Resolución 2163/2018, de 16 de noviembre, por la que se aprueba la prórroga durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019. A su vez, se autoriza y se dispone de un gasto de 69.575,00 euros correspondiente al periodo prorrogado.

Segundo.- El Pliego de Cláusulas Administrativas (nº 19, Prestación Económica: abono) establece que el abono de las contraprestaciones económicas se realizará a mes vencido, previa presentación de factura, con el visto bueno del Coordinador del Centro y de la Unidad Gestora del Contrato, confirmando que la misma responde a la ejecución del contrato en las condiciones en que se ha concertado y de acuerdo al precio de adjudicación, añadiéndole al mismo el IVA en caso de que la empresa esté sujeta a dicho impuesto.

Tercero.- Desde el día 1 de junio de 2019, el servicio de incorporación socio-laboral se viene prestando en situación de enriquecimiento injusto debido a la imposibilidad material en la gestión por parte del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social. Legalmente está calificado y definido en la Cartera de Servicios Sociales como una prestación garantizada y de atención ambulatoria, por lo que resulta obligatorio continuar con su prestación.

Cuarto.- En la actualidad se encuentra en fase de estudio la asunción del equipo de incorporación socio-laboral del Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, por la Fundación Navarra para la Gestión de los Servicios Sociales Públicos, Gizain Fundazioa.

Conclusión

Por todo ello, el jefe de la Sección de Inclusión Social y Atención a las Minorías manifiesta por un lado, la conformidad con la factura correspondiente a la actividad que la empresa ha venido desarrollando durante el mes de octubre del presente año, y, por otro lado, el desarrollo del programa técnico conforme a las cláusulas del concurso, tal y como ha podido comprobarse a lo largo del seguimiento realizado por este Servicio.

En consecuencia, se considera acreditada la necesidad de que se siga prestando el servicio y, por tanto, que procede el abono en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, al mantenerse las circunstancias en que se realiza y recibe la prestación.

Propuesta

Por ello, teniendo en cuenta la información reflejada en este informe, desde el Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social se realiza la siguiente propuesta:

Ordenar el pago a la “UTE Pauma S.L. – Centro Puente” (CIF U31892169) de la cantidad de 13.915,00 euros, como abono de la factura correspondiente al mes de octubre de 2021, en relación al contrato de asistencia para la gestión del Servicio de incorporación socio-laboral en las Áreas de Atención Primaria de Servicios Sociales de Comarca de Pamplona, Noreste y Noroeste.

El abono se realizará con cargo a la partida presupuestaria 900003 91600 2600 231603, “Contratos de Servicios de Incorporación socio-laboral” del Presupuesto de Gastos de 2021.

Pamplona, a 2 de noviembre de 2021

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE INCLUSIÓN
SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS MINORÍAS

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN PRIMARIA E INCLUSIÓN SOCIAL

Agustín Otazu Elcano

Loli Gutiérrez Urrestarazu

Conforme
LA INTERVENCIÓN



INFORME PROPUESTA

Elevo propuesta de Acuerdo de Gobierno de Navarra por el que se resuelven favorablemente los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

La disposición de gasto y ordenación de pago propuesta tiene su fundamento en la prestación de servicios no sustentada en una relación jurídica debidamente formalizada, al haber concluido previamente el plazo de ejecución del contrato en su día suscrito, sin que en este momento se haya procedido a la adjudicación de un nuevo contrato, por los motivos que se señalan:

La Dirección General de Política Social y Consumo, mediante contrato suscrito con fecha 01 de junio de 2015, adjudicó la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral (EISOL) en el Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, a la UTE compuesta por Pauma S.L. y por Centro Puente. La duración del mismo, incluidas las prórrogas se extendía hasta el 30 de mayo de 2019. (Resolución 683/2015, de 14 de mayo)

Desde el día 1 de junio de 2019, el servicio de incorporación socio-laboral se viene prestando en situación de enriquecimiento injusto debido a la imposibilidad material en la gestión por parte del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social.

En la actualidad se encuentra en fase de estudio la asunción del equipo de incorporación socio-laboral del Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, por la Fundación Navarra para la Gestión de los Servicios Sociales Públicos, Gizain Fundazioa.

Tal y como se informa en el expediente, debido a la trascendencia del servicio, su prestación se considera imprescindible por lo que la empresa ha venido prestándolo aun no habiéndose podido formalizar regularmente la correspondiente relación jurídica.

Por otra parte, mediante Resolución 199/2017, de 26 enero, de la Directora General de Inclusión y Protección Social, se adjudica a la Fundación ANAFE-CITE, a Cruz Roja Española y a la Fundación Secretariado Gitano, de forma conjunta, el contrato para la realización de un programa de Servicio de mediación intercultural e intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos en la Comunidad Foral Navarra.

Por Auto de 5 de marzo de 2018 se abre la fase de liquidación de la Fundación ANAFE-CITE, declarando su disolución y el cese de los administradores sociales. Por ello Cruz Roja Española y la Fundación Secretariado Gitano, asumen la participación de ANAFE-CITE en el contrato, siendo en lo sucesivo estas las entidades prestadoras del contrato, esto, es admitido por la Administración mediante Resolución 805/2018, de 7 de mayo, de la Directora General de Inclusión y Protección Social.

El contrato se ha ido prorrogando hasta su fecha máxima, 14 de febrero de 2021, desde este día el servicio se viene prestando en situación de enriquecimiento injusto. Legalmente está calificado y definido en la Cartera de Servicios Sociales como una prestación garantizada, por lo que resulta obligatorio continuar con su prestación.

Además, la firma del Primer Convenio Colectivo del Sector de la Acción e Intervención Social de Navarra publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 75, de 6 de abril, contempla en su

Disposición Transitoria primera la instancia a todas las entidades del sector a que procedan a comunicar formalmente al órgano competente la denuncia de los contratos, convenios o conciertos suscritos, manifestando su firme voluntad de no prorrogar los mismos. La finalidad de ello es aprobar una nueva licitación durante el primer semestre de 2021 y aplicar las mejoras contenidas en el Convenio a partir del mes de julio de 2021.

Las siguientes entidades han comunicado formalmente al Órgano Gestor la denuncia de sus respectivos contratos:

- Pauma, S.L. que gestiona el contrato para la gestión de un Servicio de Incorporación Socio Laboral en las áreas de atención primaria de Servicios Sociales de la comarca de Pamplona, noreste y noroeste.
- UTE Fundación Adsis-Fundación Santa Lucía-Adsis, que gestiona el contrato para la gestión de un servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) en las Áreas de Atención Primaria de Servicios sociales de Pamplona, comarca de Pamplona y Tudela.
- Asociación Navarra Sin Fronteras, que gestiona el contrato para la gestión del servicio de "Gestión de prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en situación de exclusión social"

Desde el día 1 de julio de 2021, estos tres servicios se vienen prestando en situación de enriquecimiento injusto debido a la imposibilidad material en la gestión por parte del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, estando los tres servicios calificados y definidos en la Cartera de Servicios Sociales como una prestación garantizada y de atención ambulatoria, por lo que resulta obligatorio continuar con su prestación.

En vista de que nos encontramos ante unas prestaciones ya debidamente ejecutadas pero sin el adecuado soporte contractual es forzoso explorar la posibilidad de acogerse a la teoría de la prohibición de enriquecimiento sin causa, construcción jurisprudencial en cuya virtud se palía, en determinadas condiciones, el indeseable desequilibrio que se produce cuando alguien que ejecuta una prestación sin el imprescindible basamento contractual, no ha generado por tal motivo el derecho a obtener el equivalente dinerario o en especie que le correspondería de haberse formalizado el oportuno contrato.

Son cuatro las condiciones que la jurisprudencia exige para poder aplicar esa doctrina (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1966, Sala de lo Civil, núm. 220):

- Un enriquecimiento por parte del demandado, representado por la obtención de una ventaja patrimonial, que puede producirse por un aumento del patrimonio (*lucrum emergens*) o por una no disminución del patrimonio (*damnum cessans*).
- Un empobrecimiento por parte del actor, representado a su vez por un daño, que puede constituir *damnum emergens* (daño positivo) y *lucrum cessans* (*lucro frustrado*), del que haya sido consecuencia el enriquecimiento del demandado.
- Falta de causa que justifique el enriquecimiento.
- Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.

A ello añade la jurisprudencia que es también exigible del negocio jurídico que pretenda acogerse a este remedio el hecho de que se halle presidido por la buena fe.

Acreditado lo anterior en el expediente y habiéndose remitido la propuesta de resolución a la Intervención Delegada en el Departamento de Derechos Sociales, esta Intervención Delegada ha emitido informe de omisión de fiscalización a los efectos del artículo 103 de la Ley Foral de



la Hacienda Pública de Navarra, dado que la prestación del servicio tras la finalización del contrato no fue fiscalizada en su momento, debiéndose remitir al Gobierno de Navarra la decisión final respecto de aquellos expedientes cuya fiscalización se haya omitido y que presenten alguna infracción del ordenamiento jurídico u otro defecto que impida su convalidación sin más trámite.

Y así, aun no ajustándose plenamente la contratación del caso a las disposiciones vigentes en materia de contratos públicos, debe procederse a pagar el servicio prestado, en virtud de la teoría en cuya virtud se persigue evitar el enriquecimiento injusto, con el fin de evitar así el perjuicio que deriva del hecho de haber prestado de buena fe un servicio a la Administración y a su instancia sin haber percibido la oportuna contraprestación.

En su virtud, se propone al Gobierno de Navarra, que resuelva favorablemente el expediente de abono de la factura relacionada en el anexo, por importe global de 75.990,86 euros, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

EL DIRECTOR GENERAL DE
PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Andrés Carbonero Martínez

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de diciembre de 2021, por el que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103.4 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y a instancia de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, se resuelve favorablemente el expediente de abono de las facturas relacionadas en el anexo, conforme a la doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto y se ordena la continuación del procedimiento para su abono.

La Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo propone aprobar la autorización y disposición del gasto de las facturas relacionadas en el anexo, a los efectos de proceder a su abono.

La disposición de gasto y ordenación de pago propuesta tienen su fundamento en la prestación de servicios no sustentada en una relación jurídica debidamente formalizada, al haber concluido previamente el plazo de ejecución del contrato en su día suscrito, sin que en este momento se haya procedido a la adjudicación de un nuevo contrato, según se justifica en el expediente administrativo.

Tal y como se informa en el expediente, debido a la trascendencia del servicio, su prestación se considera imprescindible por lo que la empresa ha venido prestándolo aun no habiéndose podido formalizar regularmente la correspondiente relación jurídica.

En vista de que nos encontramos ante una prestación ya debidamente ejecutada pero sin el adecuado soporte contractual es forzoso explorar la posibilidad de acogerse a la teoría de la prohibición de enriquecimiento sin causa, construcción jurisprudencial en cuya virtud se palía, en determinadas condiciones, el indeseable desequilibrio que se produce cuando alguien que ejecuta una prestación sin el imprescindible basamento contractual, no ha generado por tal motivo el derecho a obtener el equivalente dinerario o en especie que le correspondería de haberse formalizado el oportuno contrato.

Son cuatro las condiciones que la jurisprudencia exige para poder aplicar esa doctrina (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1966, Sala de lo Civil, núm. 220):

- Un enriquecimiento por parte del demandado, representado por la obtención de una ventaja patrimonial, que puede producirse por un aumento del patrimonio (*lucrum emergens*) o por una no disminución del patrimonio (*damnum cessans*).

- Un empobrecimiento por parte del actor, representado a su vez por un daño, que puede constituir *damnum emergens* (daño positivo) y *lucrum cessans* (lucro frustrado), del que haya sido consecuencia el enriquecimiento del demandado.

- Falta de causa que justifique el enriquecimiento.

- Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.

A ello añade la jurisprudencia que es también exigible del negocio jurídico que pretenda acogerse a este remedio el hecho de que se halle presidido por la buena fe.

Acreditado lo anterior en el expediente y habiéndose remitido la propuesta de resolución a la Intervención Delegada en el Departamento de Derechos Sociales, esta Intervención Delegada ha emitido informe de omisión de fiscalización a los efectos del artículo 103 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, dado que la prestación del servicio tras la finalización del contrato no fue fiscalizada en su momento, debiéndose remitir al Gobierno de Navarra la decisión final respecto de aquellos expedientes cuya fiscalización se haya omitido y que presenten alguna infracción del ordenamiento jurídico u otro defecto que impida su convalidación sin más trámite.

Y así, aun no ajustándose plenamente la contratación del caso a las disposiciones vigentes en materia de contratos públicos, debe procederse a pagar el servicio prestado, en virtud de la teoría en cuya virtud se persigue evitar el enriquecimiento injusto, con el fin de evitar así el perjuicio que deriva del hecho de haber prestado de buena fe un servicio a la Administración y a su instancia sin haber percibido la oportuna contraprestación.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales,

ACUERDA

1º.- Resolver favorablemente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103.4 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, el expediente de abono de las facturas relacionadas en el anexo, por importe global de 75.990,86 euros, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

2º.- Trasladar este Acuerdo al Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, a la Sección de Inclusión Social y Atención a las Minorías, a la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a la Intervención Delegada y al Centro contable en el citado Departamento.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y demás efectos. Pamplona, 2 de diciembre de 2021. LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y ACCIÓN NORMATIVA, María Belén López Carballo.

ANEXO

CONTRATO	ENTIDAD A ABONAR	NIF	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	TARIFA	ABONO
EISOL Tafalla	UTE Pauma S.L.-Centro Puente	U31892169	1566965	Abono octubre 2021	13.915,00		13.915,00
EISOL COMARC	Pauma, S.L	B31157514	1566960	Abono octubre 2021	26.991,07		26.991,07
MEDIACIÓN	Secretariado Gitano	G83117374	1567294	Abono octubre 2021	3.332,73		3.332,73
ACOMPANAMIE	Asociación Navarra Sin Fronteras	G31097058	1567996	Abono octubre 2021	5.786,73		5.786,73
EISOVI	UTE Fundación Adsis-Fundación Santa Lucía-Adsis	G31203821	1568468	Abono octubre 2021	25.965,33		25.965,33
					75.990,86	0,00	75.990,86

El Director General De Protección Social Y Cooperación Al Desarrollo, ha dictado la siguiente:

“RESOLUCIÓN 1731/2021, de 09 de diciembre, del Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, por la que se ordena el pago a la empresa “UTE Pauma S.L. – Centro Puente” de la cantidad correspondiente a los gastos por enriquecimiento injusto del mes de octubre de 2021, por la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral (EISOL) en el Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla.

Por Resolución 683/2015, de 14 de mayo, del Director General de Política Social y Consumo, se adjudica el contrato para la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral en el área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, a la empresa “UTE Pauma S.L.-Centro Puente” por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2015, o en su caso, al siguiente al de su formalización, y el 31 de diciembre de 2015.

De acuerdo con la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el contrato podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de ambas partes, por anualidades vencidas, previa solicitud del contratista, siendo su duración máxima, incluida las posibles prórrogas, de cuatro años

El contrato se ha ido prorrogando sucesivamente hasta que por Resolución 2163/2018, de 16 de noviembre, de la Directora General de Inclusión y Protección Social, se aprueba la prórroga durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019.

Presentada por parte de la empresa “UTE Pauma S.L. – Centro Puente” la factura correspondiente al mes de octubre de 2021 y, por tanto, una vez finalizado el contrato, el Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social ha emitido informe en el que expresa haber verificado la realización de los trabajos por parte de la entidad y por consiguiente presta su conformidad a la factura presentada y propone su abono en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto.

Por Acuerdo de 1 de diciembre de 2021 del Gobierno de Navarra se resuelven favorablemente determinados expedientes de abono, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto, entre los que se encuentra el que es objeto de la presente Resolución, por lo que procede el abono de la cuantía propuesta.

En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Derechos Sociales,

RESUELVO:

1º.- Incrementar la Reserva (R350000386), autorizar, disponer y ordenar el pago a la “UTE Pauma S.L. – Centro Puente” (CIF U31892169) de la cantidad de 13.915,00 euros, como abono de la factura correspondiente al mes de octubre de 2021.

El abono se realizará con cargo a la partida presupuestaria 900003-91600-2600-231603, denominada “Contratos de servicios de incorporación sociolaboral”, del Presupuesto de Gastos de 2021.

2º.- Notificar la presente Resolución a la “UTE Pauma S.L. – Centro Puente”, indicándole que contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación.

3º.- Trasladar la presente Resolución al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, al Centro Contable de la Sección de Gestión Económica y Presupuestaria y al Negociado de Asuntos Administrativos de la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y a la Intervención Delegada en el citado departamento, a los efectos oportunos.

Pamplona, a nueve de diciembre de dos mil veintiuna. El Director General De Protección Social Y Cooperación Al Desarrollo-. Andrés Carbonero Martínez.”.

Lo que notifico a Vd., para su conocimiento a los efectos oportunos.

Pamplona, a trece de diciembre de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO

Ignacio Iriarte Aristu